



LA LIBERTAD
DE PRENSA
ES PARTE DE LA
SOLUCIÓN DE LA
CUESTIÓN KURDA

Turquía, octubre de 2015

Foto de portada

Un hombre lee un periódico para examinar los resultados de las elecciones legislativas turcas (Diyarbakir, 2015).

Este informe es el resultado de dos visitas de Reporteros Sin Fronteras (RSF) a Diyarbakir y Estambul. La primera se realizó del 21 al 27 de abril de 2013 y la segunda del 6 al 12 de abril de 2015. Los miembros de RSF se reunieron con periodistas de todas las categorías, representantes de las principales asociaciones de periodistas y de prensa, y con autoridades locales y activistas de diferentes ONG.

Turquía es un barril de pólvora. Tras una tregua de dos años, el enfrentamiento entre las fuerzas armadas gubernamentales y los rebeldes kurdos liderados por el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) se reanudó en julio, teniendo como telón de fondo una crisis política, una polarización social y una situación de caos en la región. En un momento en el que los medios de comunicación ya habían conseguido jugar un papel clave en la cobertura de los acontecimientos y se habían convertido en un foro para el debate democrático, las autoridades turcas reforzaron la censura de los medios de comunicación – bloqueando sitios web, alentando la autocensura, redoblando los procesamientos por terrorismo y arrestando y expulsando a los reporteros extranjeros excesivamente curiosos-.

El proceso de paz iniciado a finales de 2012 entre el Gobierno y el PKK suscitó muchas esperanzas, incluida la referida a la libertad de expresión. RSF observó esta situación durante sus dos visitas a Estambul y Diyarbakir, la ciudad más grande del sureste de Anatolia, en 2013 y 2015. Durante dos años, los medios de comunicación pudieron discutir sobre la cuestión kurda con más libertad, los procesamientos de los que abordaban esa cuestión fueron menos frecuentes, y se concedió la libertad condicional a decenas de periodistas kurdos encarcelados.

No obstante, estaba claro que ese progreso era limitado, frágil y totalmente reversible. Lejos de ser sintomático de una apertura general respecto a la libertad de expresión, el incipiente debate sobre la cuestión kurda fue una excepción a la regla de la continua intensificación de la represión, una tolerancia específica ordenada desde las altas esferas para no poner en peligro el proceso de paz. El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan se embarcó en una amplia y nunca vista caza de brujas de sus adversarios, estrechando a la vez el cerco a los grupos de comunicación y a Internet. Los periodistas que habían sido liberados fueron procesados de nuevo. En vez de una revisión completa de las leyes opresoras turcas, solo se hicieron cambios marginales. Con menos independencia que nunca, el sistema judicial se fijó, de forma temporal, otros objetivos pero sin abandonar ninguna de sus viejas costumbres. No hay nada de sorprendente en la mano dura actual.

Dejando aparte al PKK, la cuestión kurda está relacionada, sobre todo, con los derechos humanos. Como declara el periodista Hamza Aktan: “La solución de la cuestión kurda es la democratización de la sociedad turca”. Y en esa democratización está incluida la libertad de expresión. Para conseguir la paz es esencial que se puedan exponer los problemas, que se permita que se expresen todas las voces y que se cree un espacio para el debate democrático. Además, solo la solución del conflicto pondrá fin al estado de paranoia y a la obsesión por la seguridad y permitirá que se desarrolle una cultura de transparencia y respeto por los medios de comunicación.

Por el contrario, una censura tan desmedida como la actual solo servirá para acentuar la frustración y aumentar la tensión. Las autoridades deberían frenar con urgencia esta tendencia desenfrenada y darse cuenta de que la libertad de información, ahora más que nunca, es una parte de la solución.



CONTENIDOS

I. Periodismo y cuestión kurda: Un difícil legado

1. Una historia de tabúes y opresión
2. Una impunidad persistente
3. Una tradición periodística que se remonta a los años 90

II. Se restablece la censura y vuelven los enfrentamientos

1. 2013-2015: Una tolerancia de conveniencia
2. Reformas cosméticas, sistema judicial sumiso
3. La reanudación del enfrentamiento recrudece la censura

III. Terreno movedizo para los periodistas en Diyarbakir

1. Medios de comunicación vulnerables y polarizados
2. Violencia desde todos los flancos
3. ¿Una guerra sin testigos?

Conclusión

Recomendaciones



1

PERIODISMO Y CUESTIÓN KURDA: UN DIFÍCIL LEGADO

EL PROBLEMA KURDO DE TURQUÍA

La República de Turquía fue fundada en 1923 como Estado nación unitaria y centralizada que solo reconocía la lengua turca sin tener en cuenta a las minorías nacionales. A los kurdos, que constituyen en la actualidad el 15% de la población turca y que viven principalmente en el este y sureste de Anatolia, se les ha negado desde hace tiempo una representación política y se han visto privados de sus derechos lingüísticos y culturales.

En 1984, seis años después de su fundación, el PKK inició la lucha armada por la independencia. Los años 90 estuvieron marcados por los enfrentamientos sangrientos entre las fuerzas armadas turcas y el PKK, motivo por el cual se declaró un estado de emergencia en el sureste del país. La población civil pagó un precio muy alto:

se arrasaron miles de aldeas y millones de personas fueron desplazadas.

Poco después de que su líder, Abdullah Öcalan, fuera arrestado en 1999, el PKK declaró una tregua unilateral e inició una negociación con las autoridades. Tras una ronda de negociaciones, el proceso fracasó en los años siguientes y cada una de las treguas sucesivas terminó con la reanudación de los enfrentamientos. Después de que en 2012 se produjeran los enfrentamientos más sangrientos desde los años 90, Öcalan y el primer ministro Recep Tayyip Erdogan anunciaron un nuevo proceso de paz a finales de 2012, pero también este proceso fracasó en julio de 2015. Se calcula que el número de víctimas provocadas por este largo conflicto de 30 años es de aproximadamente 40.000.

1. UNA HISTORIA DE TABÚES Y OPRESIÓN

Censura y persecución judicial

Uno de los principales tabúes de la República de Turquía ha sido siempre el destino de las minorías nacionales. Los intelectuales que mostraron un especial interés por este tema, como Ismail Besikçi y Ragip Zarakolu, fueron considerados enemigos públicos y perseguidos por las autoridades turcas en los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero fue la intensificación del enfrentamiento entre las fuerzas armadas turcas y el PKK lo que provocó uno de los periodos más oscuros para el periodismo turco.

En efecto, el estado de emergencia (OHAL) en el sureste de Anatolia de 1987 a 2002 impuso una censura estricta, reforzada por los Tribunales de Seguridad del Estado (DGM), unos tribunales especiales cuyo objetivo principal eran los medios de comunicación kurdos y los de izquierdas. Se cerraron de inmediato unos 20 periódicos **(1)** en las regiones afectadas, se prohibió la participación en las radios de ciertos personajes muy conocidos, y funcionarios y agentes de la policía se atrevieron a decidir por sí mismos qué canciones kurdas no podían ser retransmitidas **(2)**.

La Ley Antiterrorista (TMY), aprobada en abril de 1991, inmovilizó con una camisa de fuerza a los medios de comunicación que habían sobrevivido al estado de emergencia, introduciendo sanciones extremadamente duras para los delitos definidos de forma somera como “propaganda separatista” y “propaganda terrorista”. Los medios de comunicación que apoyaban el movimiento político kurdo se desmoronaron por el impacto de condenas judiciales, al mismo tiempo que, uno a uno, sus periodistas eran arrestados. En diciembre de 1993, la policía irrumpió en la sede central en Estambul del diario prokurdo Özgür Gündem, arrestando a unos 100 empleados, al mismo tiempo que detenían a otros 50 en todo el país. Decenas de periodistas y otros empleados del diario fueron encarcelados, incluyendo al redactor jefe Isik Yurtçu, que fue galardonado con el Premio por la Libertad de Expresión de RSF en 1996 mientras estaba en prisión.

Aunque los tribunales eran, por lo general, más severos con los diarios kurdos, esta mano dura también afectó a aquellas figuras de los principales medios de comunicación que se atrevían a cuestionar la política del Gobierno hacia el movimiento kurdo o a dar voz a los kurdos. En octubre de 1995, al periodista de Milliyet, Ahmet Altan, se le impuso una sentencia de 20 meses de cárcel y una importante multa por un artículo de opinión titulado “Atakürt” **(3)**, en el que urgía a los turcos a imaginar su situación y la de los kurdos invertidas. El famoso periodista y novelista Yasar Kemal fue condenado a 20 meses de prisión en 1996 por un artículo en el que denunciaba el destino de los kurdos. Orhan Pamuk y otros intelectuales lanzaron una importante campaña de desobediencia civil para impedir que Kamal entrara en la cárcel y para

condenar la censura. Finalmente, Kemal no fue encarcelado pero tuvo que afrontar otros procesos y condenas. Ragip Duran, un conocido periodista que trabajaba para varios medios de comunicación turcos y extranjeros, incluyendo AFP y Libération, fue encarcelado en 1998 por una entrevista a Abdullah Öcalan publicada cuatro años antes en Özgür Gündem.

1. Como Özgür Gündem, Demokrasi y Evrensel
2. En septiembre de 1999, se cerró durante un año la televisión Kanal 21, con sede en Diyarbakir, por haber retransmitido la canción “Mehmedim”, interpretada por el famoso cantante Ivan Perwer. A la cadena de televisión le costó dos años ganar la apelación contra el cierre de la emisora.
3. En el artículo imaginaba una “República kurda” fundada por “Atakürt” en la que los turcos no tenían el derecho de hablar su lengua y hablaba de los “Kurdos del Mar” en alusión a la forma con la que, frecuentemente, se hacía referencia a los kurdos en los años 80 como “Turcos de las Montañas”.

Un oficio peligroso

De 1992 a 1995, además de la persecución judicial, unos 20 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron víctimas de sentencias extrajudiciales (4). Muchos de ellos trabajaban para Özgür Gündem, que se vio obligado a cerrar a causa de cientos de procesamientos y fue temporalmente titulado como Özgür Ülke. El 3 de diciembre de 1994, tres explosiones simultáneas destruyeron su sede central y su rotativa en Estambul y su oficina de Ankara. Uno de sus transportistas fue asesinado y 23 personas resultaron heridas. Los empresarios que habían fundado el periódico fueron asesinados uno detrás de otro. La sede central de Belge, una casa editorial que desconocía los tabúes sobre la cuestión kurda y armenia, sufrió un atentado con bombas en 1995. La cárcel de Diyarbakir se hizo famosa durante esos años por sus atrocidades y por el uso sistemático de la tortura.

Se acusó a las fuerzas de seguridad y a sus acólitos de la mayoría de los asesinatos de periodistas, pero también se sospechó que el PKK podía haber matado a algunos periodistas, incluso al periodista de Yeni Ülke Mecit Akgün, que fue encontrado ahorcado cerca de Nusaybin en junio de 1992. Una nota firmada “PKK” encontrada al lado del cadáver decía: “Ha sido castigado por traidor”. En un informe de Human Rights Watch (HRW) de 1999 se afirmaba que el PKK podría ser responsable del asesinato de cinco periodistas entre los años 1992 y 1995 (5).

Sobre el terreno, la seguridad de los periodistas no estaba garantizada en absoluto. Aunque ondeaba una bandera blanca, el periodista de Sabah Izzet Kezer murió, probablemente al ser aplastado por un tanque, cuando cubría los enfrentamientos en Cizre en marzo de 1992. En enero de 1994, el PKK secuestró a Kutlu Esendemir y a Levent Oztürk, dos periodistas que trabajaban para el canal de la televisión estatal

TGRT, manteniéndolos retenidos durante tres meses. En marzo de 1995, el periodista de AFP Kadri Gürsel y el fotógrafo de Reuters Fatih Saribas fueron secuestrados por el PKK y retenidos durante casi un mes.

Estrechamente controlados por el Ejército y observados con sospecha por las dos partes beligerantes, los periodistas extranjeros también estaban expuestos al peligro. Aliza Marcus, una periodista estadounidense que había investigado los delitos cometidos por ambos bandos, fue arrestada dos veces, en 1993 y 1995. Objetivo de una intensa campaña difamatoria en los principales medios de comunicación turcos, fue eximida de la acusación de “propaganda separatista” pero tuvo que abandonar Turquía.

4. Asociación de Periodistas Turcos (TGC)

5. Informe de Human Rights Watch de 1999: “Violación de la libertad de expresión en Turquía”

Una tensión que crece y disminuye

En enero de 2004, se permitió finalmente el uso de la lengua kurda en los medios de comunicación. La última restricción lingüística, que limitaba de forma drástica las horas de retransmisión y que exigía la traducción simultánea al turco, fue anulada en noviembre de 2009 (6). Pero aún así, permanecía la prohibición de tratar la cuestión kurda. Se alternaron periodos de tensión con periodos más relajados de acuerdo con los acontecimientos políticos. La actitud adoptada por el sistema judicial tendía a ser más suave cuando estaban en curso las negociaciones con el PKK, pero fue más dura cuando se reanudaron los enfrentamientos.

Después de que el Gobierno del AKP abandonara su política conciliadora hacia los kurdos en 2008 y 2009, se detuvo nuevamente a decenas de periodistas prokurdos como parte de una investigación sobre el KCK, una rama política del PKK. Solo en diciembre de 2011, fueron arrestados no menos de 44 periodistas en diferentes partes del país, a los que se les impuso una detención preventiva bajo la acusación de ser miembros del “servicio de prensa” del KCK. El periodista de Özgür Gündem Bayram Balci, declaró a RSF en 2013: “Por lo que nos concierne, los procesos contra el KCK son como la persecución orquestada por Tansu Ciller [primer ministro a principios de los 90]. La única diferencia es que la eliminación física ha sido sustituida por el encarcelamiento”.

6. Comunicado de prensa de RSF del 20 de noviembre de 2009: “A los medios de comunicación se les permite usar la lengua kurda pero todavía se les prohíbe discutir con libertad sobre la cuestión kurda”

2. UNA IMPUNIDAD PERSISTENTE

“Miles de personas siguen sin poder llevar flores a las tumbas de sus seres queridos”, afirma Balci, que defiende la idea de una comisión de la verdad para esclarecer las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales de los años 90. Refiriéndose a un periodista de Özgür Gündem que fue secuestrado cerca de Sanliurfa en marzo de 1994 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, Balci añade: “Trabajé con Nazim Babaoglu. ¿A qué tumba le llevo flores y dónde? Todos los periodistas y activistas civiles con los que se ha reunido RSF afirman que los años de represión más dura siguen pesando en la sociedad turca porque los familiares de las víctimas también lamentan la falta de justicia y de verdad. Como otras atrocidades cometidas en los 90, casi la mayoría de los asesinatos de periodistas siguen impunes.

RSF visitó en abril de 2013 la tumba de Hafız Akdemir en Lice, una aldea cerca de Diyarbakir. Este joven periodista fue tiroteado en una calle de Diyarbakir en junio de 1992, pero nunca hubo una investigación creíble sobre su asesinato. Lo mismo sucede respecto a Çetin Abayay, un joven periodista del diario prokurdo Özgür Halk, que fue asesinado en Batman en julio de 1992. Y también con Mehmet İhsan Karkus, que fue acribillado a balazos en Silvan en marzo de 1993. Esta impunidad generalizada está protegida en la actualidad por una ley parlamentaria de prescripción para los asesinatos no resueltos, vigente desde hace 20 años.

Es bien conocida, no obstante, la maquinaria empleada para combatir al PPK en el sureste a comienzos de los años 90. Con la ayuda de una unidad especial de la policía denominada JITEM, se crearon escuadrones de la muerte cuyos miembros fueron reclutados en los círculos de la criminalidad y de los ultranacionalistas y entre ciertas milicias como la milicia islamista Hezbolá. También se ha descubierto el papel desempeñado por el Gobierno en el atentado con bombas contra Özgür Gündem en diciembre de 1994. El semanario Tempo publicó una nota firmada por el primer ministro Tansu Çiller en la que pedía “medidas efectivas” contra ese diario. Pero las investigaciones que rastrean la responsabilidad atribuible al “Estado profundo” son, políticamente, demasiado explosivas. En 1998, una comisión parlamentaria estableció y documentó a grandes rasgos la comisión de ciertas atrocidades en el “Informe Susurluk”, pero el informe fue inmediatamente enterrado. Y, tras crear esperanzas con la investigación sobre la red Ergenekon [supuestamente una organización formada entre otros por militares, policías, políticos, sindicalistas y académicos de ideología kemalista y nacionalista, con el objetivo de dar un golpe de Estado en 2003 contra el gobierno de Erdogan], el sistema judicial se empantanó en una amplia caza de brujas contra los opositores al régimen de Erdogan.

La excepción es el asesinato de Musa Anter, un intelectual y líder kurdo y columnista en el *Ozgür Gündem* que fue asesinado a balazos en Diyarbakir en septiembre de 1992. Después de 20 años de inactividad, las autoridades retiraron en el último momento la investigación sobre ese asesinato de la ley parlamentaria de prescripción con la aparente voluntad de hacer un gesto simbólico en este crimen tan famoso. Pero incluso este caso demostró la incapacidad del sistema judicial para realizar investigaciones efectivas. El Estado ya tenía conocimiento de su papel en ese asesinato y ofreció sus disculpas en el Informe Susurluk de 1998. El presunto autor, el “policía municipal” Hamit Yildirim, fue arrestado cuando aún no se sabía el resultado de su juicio. Pero aún se sigue buscando a la persona que se supone que organizó el asesinato, el ex oficial del JITEM Malmut Yildirim (1). La incorporación de este caso a otras investigaciones sobre agresiones en el sureste del país fue un avance, pero al transferir esa investigación a Ankara ha dificultado que se escuchara a la parte civil, limitando su transparencia.

Una de las demandas de los familiares de los asesinatos masivos de los años 90 es que se reconozcan como crímenes contra la humanidad, lo que permitiría soslayar la ley parlamentaria de prescripción, una demanda compartida por Human Rights Watch (HRW) (2). “La justicia debe tener como finalidad conseguir la paz”, afirma Emma Sinclair-Webb, representante de HRW en Turquía. En un comunicado sobre impunidad de 2013 (3), HRW declaró: “En repetidos dictámenes sobre Turquía, el Tribunal Europeo encontró violaciones del derecho a la vida y unas pautas deficientes a la hora de llevar a cabo investigaciones efectivas” sobre los delitos cometidos en los 90.

Hay otra posibilidad por lo que respecta a los periodistas. Y es el reconocimiento de la categoría de crímenes contra la libertad de expresión, como proponen cuatro relatores especiales sobre libertad de expresión y libertad de prensa (ONU, OCDE, OAS y ACHPR). En una declaración conjunta de junio de 2012, declararon: “Debería incluirse en la ley penal la categoría de crímenes contra la libertad de expresión, ya sea de forma explícita o como una circunstancia agravada que comporta penas más graves”. Además, añadieron que “los delitos contra la libertad de expresión, y el delito de obstruir la justicia en relación con esos delitos, deberían estar sujetos bien a una ilimitada o bien a una ampliada ley parlamentaria de prescripción” (4).

“¿Cómo se puede conseguir un sistema de justicia viable cuando aún están sin castigar los crímenes de los años 90?” Esta pregunta de Tahir Elçi, presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, sigue sin tener respuesta. Mientras tanto, la sociedad civil mantiene que esos crímenes no han sido olvidados. Siguiendo el ejemplo de las “Madres de la Plaza de Mayo” argentinas, las madres de las personas que desaparecieron en los 90 se siguen manifestando todos los sábados en la plaza Galatasaray de Estambul. En marzo de 2015, con ocasión del 25º aniversario de la

desaparición de Nazim Babaoglu, organizaron una manifestación para pedir que se supiera la verdad sobre su suerte.

1. Conocido bajo el seudónimo de “Yesil”
2. Informe de HRW de 2012 “Tiempo para la justicia”
3. Comunicado de prensa de HRW del 25 de abril de 2013 “Turquía: la importancia de la justicia para el proceso de paz kurdo”
4. Declaración conjunta del 25 de junio de 2012 sobre delitos contra la libertad de expresión



El conocido intelectual kurdo y periodista del Özgür Gündem Musa Anter, asesinado en Diyarbakir, en septiembre de 1992

©BIANET



3. UNA TRADICIÓN PERIODÍSTICA QUE SE REMONTA A LOS AÑOS 90

La represión de los años 90 y la autocensura practicada por los principales medios de comunicación nacionales generó una prensa centrada en la cuestión kurda. El diario Özgür Gündem fue el abanderado, pero también se puede incluir en este grupo a la agencia de noticias DIHA, al periódico en lengua kurda Azadiya Welat y al grupo de comunicación con sede en Diyarbakir Özgür Gün, entre otros. Orgullosos de su “tradición de prensa libre” (özgür basın geleneği), esos medios de comunicación se forjaron durante el estado de sitio en respuesta al ubicuo monopolio de la información del Ejército. Sus principales objetivos eran informar sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y reflejar la vida cotidiana y las percepciones de la población del sureste.

La legitimidad de esa prensa reside en que tiene sus raíces en la comunidad local y en su cercana relación con la base activista del movimiento kurdo. Está considerada desde hace tiempo como la voz de los sin voz, porque informan sobre lo que otros medios no lo hacen. Es un tipo de periodismo que surge directamente de una población que ha sido silenciada y como respuesta inmediata a esa marginalización, para reivindicar su existencia y su realidad. Se podría definir como “medios de comunicación del ciudadano” o como “medios de comunicación de la comunidad”, razón por la que ha sido criminalizada, pues este tipo de periodismo es activista por naturaleza y riesgo. Las autoridades siguen considerando a estos medios de comunicación como portavoces del PKK.

“Los medios de comunicación kurdos fueron creados como instrumentos para perseguir una lucha”, dice un reportero que no se considera a sí mismo como parte de esa tradición. “Es un periodismo que tiene una misión”, afirma otro periodista. Esos medios de comunicación piensan más en términos políticos, sociales y morales que en términos estrictamente profesionales. Sus profesionales ejercen el periodismo para escribir sobre problemas que consideran importantes y piensan que tienen el deber de poner el acento en la cuestión kurda. “La situación que se vive aquí nos impele a hacer un tipo completamente diferente de periodismo” afirmó en 2013 Hayrettin Celik, cofundador de la Asociación de Periodismo Libre (ÖGC) con sede en Diyarbakir. “Hay numerosos temas que no logramos cubrir porque la prioridad son los problemas políticos, los sucesos que cuestan vidas humanas (...). Podría parecer periodismo activista pero solo refleja el padecimiento de la gente, la realidad sobre el terreno”.

No es solo periodismo por kurdos y para kurdos. Gracias a sus raíces locales y a la atención que presta a la violación de los derechos humanos, jugó un papel clave a la hora de sortear la censura e informar a la opinión pública turca e internacional sobre los crímenes masivos ocurridos durante los años oscuros. Faruk Bildirici, el anterior defensor del lector del diario nacional turco Hürriyet, llegó a decir: “En los años 90 no hicimos periodismo, pero sí que lo hicieron los medios de comunicación kurdos”. Si un día se resuelve la cuestión kurda, la prensa kurda tendrá que reinventarse. Entretanto, sigue informando sobre el desarrollo de la situación en la zona, prestando especial atención a la suerte de los kurdos en Siria y al enfrentamiento entre el Estado Islámico y la milicia siriakurda YPG **(1)**.

En vez de este periodismo comprometido, otros medios de comunicación profesionales del sureste del país prefieren un periodismo con menos implicaciones, que mantiene las distancias y que, por encima de todo, acata los principios profesionales. En esta categoría se puede incluir a los informadores independientes locales y a los corresponsales de los medios de comunicación nacionales más importantes (aunque estos medios de comunicación se caracterizan con frecuencia por sus propias formas de dependencia económica y política).

Siendo ambas legítimas, estas dos formas rivales de periodismo no constituyen el único panorama de los medios de comunicación en el sureste (que comprende también una prensa islámica y otras formas de periodismo) pero sus rasgos distintivos contribuyen a su polarización. Uno de estos periodismos está acusado de servilismo hacia el PKK, el otro de autocensura. No obstante, el nivel de relación entre estos dos tipos de periodismo –corriente principal y simpatizantes del movimiento kurdo- está muy desarrollado. “Tanto personal como institucionalmente, tenemos relaciones con todos”, afirma Bayram Balci. “Özgür Gündem incluso ha servido para muchos como escuela en el mundo de los medios de comunicación de Estambul. Cientos de nuestros antiguos empleados trabajan ahora en los principales medios de comunicación”.

Aunque la reanudación de los enfrentamientos amenaza ahora esas relaciones, la persecución por parte del Gobierno de los principales medios de comunicación kemalistas en los últimos años ha ayudado a cambiar la percepción de los medios de comunicación prokurdos. Durante una conversación en abril de 2015, Bayram Balci afirmó: “A diferencia de lo que pasaba en los años 90, los principales medios de comunicación no ignoraron la [detención de periodistas prokurdos] de diciembre de 2011. Incluso reaccionaron cuando se cerró Özgür Gündem durante un mes. En el pasado, no nos consideraban ni siquiera como un diario”. Cuando la cifra de periodistas encarcelados llegó a 100, las principales asociaciones de periodistas olvidaron sus diferencias ideológicas y políticas y pidieron la libertad de todos ellos.

A medida que van quedando lejos los 90, se crean nuevos medios de comunicación y se asume la cuestión kurda con una perspectiva que ya no se basa tanto en la comunidad. IMC, un canal de televisión creado en 2011, se define no como un medio de comunicación kurdo sino como uno que es “especialmente sensible hacia la cuestión kurda”. Al mismo tiempo, insiste en su independencia. “No estamos politizados, nuestra fuerza reside en que estamos abiertos”, afirma el director de informativos de IMC Hamza Aktan, añadiendo que él informa no solo de lo que dice el PKK sino también de lo que dicen los partidos opuestos al PKK, por lo que, todos los martes, informa sobre las preguntas parlamentarias de todos los partidos turcos.

1. Zehra Dogan, un periodista de la agencia de noticias JINHA, recibió uno de los Premios de Periodismo Metin Göktepe en marzo de 2015 por una serie de reportajes sobre las mujeres yazidíes que habían escapado de su secuestro a manos del Estado Islámico.





Un hombre lee un periódico ante las imágenes de Selahattin Demirtas, vicepresidente del prokurdo Partido Democrático del Pueblo (HDP), del famoso cantante turco Ahmet Kaya, y del director Yilmaz Guney (Diyarbakir, 2015)

©AFP PHOTO / BULENT KILIC

DOS ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE DIYARBAKIR

Fundada en 1997, la Güneydogu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) –Asociación de Periodistas del Sureste- se define como independiente de cualquier movimiento político. Afirma que cuenta con 240 miembros en las once regiones del sureste de Anatolia, muchos de los cuales son corresponsales de los diarios nacionales más importantes. Creada en 2013, la Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) –Asociación de Periodistas Independientes- declara que cuenta con 230 miembros destacados tanto en el Kurdistán turco como en Rojava (el Kurdistán sirio). La ÖGC también se declara independiente pero no esconde su afinidad con el movimiento kurdo y tiene una estructura de gobierno semejante a ese movimiento, lo que implica tener a un hombre y a una mujer en una doble presidencia. Como su actual vicedirector, Ertus Bozkurt, muchos de sus miembros han estado en prisión recientemente. A pesar de todo, las dos asociaciones afirman que están en permanente contacto y les une la solidaridad profesional. “Nuestras relaciones no se deterioran con facilidad”, afirma el vicedirector de la GGC Mücahit Ceylan. “Por lo general, formamos un frente unido cuando necesitamos defender a periodistas encarcelados o denunciar la censura”, declara Ertus Bozkurt.

2

SE RESTABLECE LA CENSURA Y VUELVEN LOS ENFRENTAMIENTOS

Una vez más, la distensión no ha durado. La cobertura mediática de la cuestión kurda llegó a ser normal desde 2013 hasta el verano de 2015 gracias al proceso de paz entre las autoridades turcas y el PKK. Pero la tolerancia era frágil y reversible a causa de la falta de independencia del sistema judicial, a la naturaleza limitada de las reformas adoptadas y al carácter autoritario del Gobierno. No hay nada sorprendente respecto a la censura más draconiana que se aplica en la actualidad a todos los medios de comunicación en el terreno del combate al terrorismo. Solo reformas profundas y duraderas que favorezcan la libertad de expresión y la vuelta a la norma de la ley frenarán estas oscilaciones y eliminará, una vez por todas, el tabú de la cobertura de la cuestión kurda.



Cámaras en el suelo como forma de protesta durante una manifestación en la que se protestaba por la detención de varios periodistas y se pedía la reforma de las leyes que se aplican a los medios de comunicación turcos. En la pancarta se lee: “No hablé, aunque era mi turno” (Ankara, 2011)

©AFP PHOTO / ADEM ALTAN

El 28 de diciembre de 2012, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan declaró en la televisión que la Organización Nacional de los Servicios de Inteligencia de Turquía (MIT) había iniciado conversaciones con el PKK para poner fin a 30 años del conflicto en el este del país. El 21 de marzo de 2013 (el Año Nuevo kurdo), Abdullah Öcalan anunció una tregua ilimitada del PKK y el paso “de la resistencia armada a una época de combate político democrático”.

Se dio la bienvenida al comienzo del proceso de paz con esperanza, aunque pronto volvieron a surgir complicaciones. El PKK comenzó a retirar sus fuerzas armadas de Turquía en la primavera de 2013. En otoño, el Parlamento aprobó “un paquete de medidas de democratización” con concesiones al uso de la lengua kurda, incluyendo su uso en la enseñanza pública. Al año siguiente, se concedió la libertad condicional a miles de prisioneros kurdos. El proceso se congeló por lo arduo de las conversaciones y por el discurso nacionalista que acompañó los tres comicios celebrados en 2014 y 2015.

La retirada del PKK de Turquía no se completó nunca. Parecía que el proceso de paz podría ser reavivado por los Acuerdos de Dolmabahçe de febrero de 2015, que establecieron un acuerdo conjunto y diez puntos del mapa de ruta, pero fueron de inmediato denunciados por Erdogan. El carácter autoritario de Erdogan, patente en las duras medidas tomadas contra el movimiento “Occupy Gezi” y en la caza de

brujas contra el movimiento Gülen, solo sirvió para empeorar sus relaciones con el movimiento kurdo. Incluso las repercusiones de la guerra en Siria tuvieron un gran impacto. El PKK consiguió una legitimidad internacional sin precedentes por su lucha contra el Estado Islámico, pero sus victorias provocaron temor en Turquía. Al mismo tiempo, muchos kurdos se sintieron decepcionados por el rechazo de Ankara a tomar partido.

Todos estos inconvenientes, más el alterne de declaraciones contradictorias y la falta de un mapa de ruta compartido, hizo que el proceso de paz fuera ilegible y erosionó la fe de las bases activistas (1). Erdogan pronunció varios discursos belicosos que convirtieron la campaña de las elecciones legislativas de 2015 en un duelo entre su partido AKP y el partido prokurdo HDP. Cuando el HDP entró en el parlamento, privó al AKP de la mayoría absoluta de la que había gozado desde hacía 12 años. Erdogan dejó inmediatamente claro que él no iba a perdonar. Con un Gobierno interino, el problema de la seguridad devino cada vez más explosivo. La chispa que causó la detonación fue la muerte de 33 activistas prokurdos el 20 de julio de 2015 en Suruç, una ciudad turca en la frontera con Siria, por un atentado con bombas reivindicado por el Estado Islámico.

Al mismo tiempo que acusaba al Gobierno de ser cómplice del Estado Islámico, el PKK anunció el fin del alto el fuego que había respetado en los dos años anteriores y atacó a soldados y policías turcos. El Gobierno

respondió con ataques aéreos que, aunque estaban dirigidos contra el Estado Islámico, golpearon de forma más amplia al PKK. Mientras cientos de activistas prokurdos eran arrestados en todo el país, Erdogan pidió la anulación de la inmunidad parlamentaria para ciertos diputados del HDP y que se abriera una investigación sobre el copresidente del HDP Selahattin

Demirtas, quien a su vez acusó al Gobierno de organizar un complot para anular los resultados electorales y urgió a las dos partes a volver a sentarse a la mesa de negociaciones.

[1. Informe del Grupo de Crisis Internacional: “Turquía y el PKK. Salvar el proceso de paz”](#)

1. 2013-2015: UNA TOLERANCIA DE CONVENIENCIA

Distensión temporal de la censura

El 25 de abril de 2013, más de 100 periodistas turcos asistieron a una histórica conferencia de prensa del PKK a los pies del monte Qandil, en el norte de Irak, durante la cual los representantes del PKK anunciaron que estaban a punto de retirar sus fuerzas armadas de Turquía como parte de las negociaciones de paz. Al día siguiente, aparecieron publicadas en la primera página de todos los diarios turcos las fotos de los líderes del PKK difundiendo sus declaraciones ante un gran retrato de Abdullah Öcalan. Incluso el periódico nacionalista Sözcü publicaba en la primera página una de esas fotos con el titular “El único que no estaba allí era Sözcü”.

Todo esto habría sido impensable unas cuantas semanas antes. No solo porque habrían sido pocos los medios de comunicación que habrían mandado reporteros al monte Qandil, sino también porque los que lo hubieran hecho habrían sido procesados de acuerdo con la Ley Antiterrorista. Todos los periodistas que citaban a los representantes del PKK, aunque fuera para criticarlos, se enfrentaban a la posibilidad de ser encarcelados bajo la acusación de “propaganda a favor de una organización terrorista”. Ilustrar un artículo con una foto de algún miembro del PKK o referirse al PKK sin describirlo como una organización “terrorista separatista” era también motivo de procesamiento.

En mayo de 2012, un tribunal superior consideró que referirse al líder del PKK como “el señor Öcalan” era una señal de respeto equivalente a “hacer apología de un criminal” (1), un delito que se podía castigar con tres años de prisión. Los fotógrafos y las cámaras que cubrían manifestaciones, reuniones o funerales prokurdos, tenían que

mantenerse a una distancia considerable para asegurar que no se mostraban banderas, retratos o incluso vestimenta con los colores kurdos, porque habría podido considerarse como propaganda. Incluso estar presente en este tipo de manifestaciones podía constituir un delito por “pertenencia a una organización terrorista”.

Aunque la euforia de abril de 2013 se esfumó rápidamente, la relativa tolerancia demostrada por los tribunales hacia la cobertura de la cuestión kurda por los medios de comunicación duró dos años. Özcan Kiliç, un abogado que representaba a Özgür Gündem y a otros medios prokurdos, dijo en abril de 2015 que, en ese momento, había tenido solo unos cuantos casos. “Para nosotros, el ritmo se ha desacelerado bastante”, afirmó, contrastando esta situación con la oleada de procesamientos por el delito de haber insultado a Erdogan y la eliminación de muchísimos contenidos online.

Liberados del léxico impuesto por la censura, todos los medios de comunicación cubrieron la cuestión kurda de acuerdo con sus propios puntos de vista políticos. Los principales medios de comunicación tendieron a apoyar el proceso de paz, mientras que los medios nacionalistas de izquierdas o de derechas se opusieron con firmeza. Los medios de comunicación que apoyaban al movimiento Gülen se mostraban, en un primer momento, entusiastas, pero se hicieron gradualmente más escépticos tras la ruptura con el Gobierno, volviendo a introducir el término “terrorista” cuando se referían al PKK y utilizando con frecuencia el proceso de negociación para atacar a Erdogan (2).

Muchos periodistas del sureste se mostraron desconfiados y resentidos cuando algunos de los principales medios de comunicación cambiaron su línea editorial que apoyaba la seguridad por una información “a favor” de la cuestión kurda, porque consideraban este cambio de opinión como una señal más de su falta de independencia. Criticaron la forma con la que muchos de esos medios compitieron entre ellos en el dar publicidad a los acontecimientos por considerarse “un plan del Gobierno” e incluso una forma de autocensura. Por el contrario, los periodistas en el sureste del país insistían en el papel de los medios de comunicación locales a la hora de asegurar que el proceso de paz se mantuviera vivo manteniendo los pies en el suelo.

La retórica del Gobierno sobre el movimiento kurdo fue muy desigual durante los dos años de negociación con el PKK. Las diferentes elecciones, el movimiento de protesta del parque Gezi y el asedio de Kobane provocaron un discurso muy hostil por ambas partes y reforzaron el vaticinio de la ruptura de las negociaciones. El informe de octubre de 2013 (3) relativo a los medios de comunicación del think tank Grupo Internacional de Crisis, afirmaba: “La mezcla confusa de informes incompletos, parciales y, con frecuencia, desafiantes, sobre el proceso de paz con el PKK y sobre las reformas kurdas es (...) otro síntoma de la falta de claridad, consistencia y estrategia política comprometida por parte de Turquía sobre estos temas”.

1. Decisión del Tribunal Superior
2. Rusen Çakir, 15 de abril de 2014
3. Relación del Grupo Internacional de Crisis, “El lamento del lobo: por qué los temores turcos no pueden bloquear la reforma kurda”, 2013

La presión nunca desapareció

Aunque es verdad que mucho menos que antes, los procedimientos abusivos contra los medios de comunicación continuaron durante el momento álgido del proceso de paz por sus informaciones sobre la cuestión kurda. El director de Özgür Gündem Reyhan Capan es, en la actualidad, el punto de mira de nueve procesamientos distintos que guardan relación con algunos artículos publicados en febrero y marzo de 2014. Acusado de reproducir declaraciones o comunicados del PKK y de publicar propaganda del PKK, se enfrenta a 45 años de prisión de acuerdo con la Ley Antiterrorista. Arafat Dayan, el director del semanario Demokratik Ulus, se enfrenta a 90 años de cárcel acusado de haber publicado propaganda del PKK. En diciembre de 2014, el redactor jefe de Özgür Gündem Eren Keskin fue acusado de “denigrar al Estado y a la Nación turca” de acuerdo con el artículo 302 del Código Penal por publicar que un miembro de las fuerzas armadas había cometido varios delitos de abusos sexuales.

Los tabúes también funcionaron en la información sobre el proceso de paz y la presión ejercida por esos tabúes no era de naturaleza judicial. Después de que el diario Milliyet publicara en marzo de 2013 que algunos diputados habían visitado a Abdullah Öcalan en la prisión, Erdogan criticó públicamente al periódico e hizo una humillante llamada telefónica a su propietario. Presionado, el periódico fulminó a su director editorial, Derya Sazak, y suspendió a su famoso columnista, Hasan Cemal, que terminó por dimitir.



Más de 100 periodistas turcos asisten a la histórica conferencia de prensa del PKK a los pies del monte Qandil en el norte de Irak el 25 de abril de 2013

©AFP PHOTO STR

2. REFORMAS COSMÉTICAS, SISTEMA JUDICIAL SUMISO

Durante las dos décadas pasadas, RSF ha controlado de cerca cómo se ha mantenido el tabú en la información de los medios de comunicación sobre la cuestión kurda gracias a una legislación draconiana y a una cultura judicial que ha privilegiado la seguridad por encima de cualquier otro asunto (1). Para conseguir que fuera posible el diálogo, las autoridades tuvieron que decidirse a emprender reformas legislativas (2). Cuando los medios de comunicación acudieron en masa al monte Qandil en abril de 2013, decenas de miles de activistas y representantes de la sociedad civil se encontraban todavía en una situación de detención preventiva por leves pruebas judiciales en los procesos contra el KCK. En esos procesos judiciales estaban incluidos decenas de periodistas y otros trabajadores de los medios. Como declaró en ese momento el columnista y experto en la cuestión kurda Ümit Firat: “La mejora del sistema judicial en Turquía es la piedra angular del proceso de paz”.

El Gobierno consiguió que el Parlamento aprobara una serie de reformas legislativas como “propuestas de reformas judiciales”. Las dos primeras se presentaron a finales de los años 2000 con vistas a facilitar la entrada de Turquía en la UE, mientras que la tercera y la cuarta propuesta se presentaron para conseguir que Turquía se ajustara a las normas del Consejo de Europa y así poner fin a las numerosas sentencias contra Turquía por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (3). Los jueces las utilizaron para conseguir los resultados políticos deseados, incluyendo una liberalización parcial del debate sobre la cuestión kurda. Pero la profundidad de las reformas nunca fue suficiente para lograr una ampliación duradera de la libertad de expresión, dado que el Parlamento adoptó de forma simultánea una serie de medidas que restringían las libertades, incluyendo la libertad de expresión online.

1. Informe de RSF de 2011: “Un libro no es una bomba”
2. Contribución de RSF a la Revisión Periódica Universal de Turquía en 2015 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
3. Naim Karakaya y Hande Özhaves, Informe del TESEV de 2013, “Propuestas de reforma judicial: Valoración de sus efectos respecto a derechos y libertades”

“Tercera propuesta de reforma judicial”

El Parlamento aprobó la “tercera propuesta” (Ley nº 6352) (4) en julio de 2012. Las principales medidas que afectaban a la libertad de expresión eran las siguientes (5):

- Congelación por tres años de los casos que implicaban “delitos de expresión y de opinión en los medios de comunicación” cometidos antes del 31 de diciembre de 2011. Si la sentencia máxima era de cinco años, las acusaciones y

las sentencias de esos delitos se suspendían durante tres años y, posteriormente, se anulaban si la persona implicada no cometía un delito similar durante ese período. En efecto, se congelaron miles de casos, pero la suspensión no evitó que la amenaza pendiera permanentemente sobre la cabeza de los periodistas, lo que alimentó la autocensura. En algunos casos, provocó que evitaran apelar contra condenas injustificadas.

- Derogación del artículo 6.5. de la Ley Antiterrorista, que permitía el cierre de una publicación de 15 a 30 días por “propaganda a favor de una organización terrorista”. Utilizado ampliamente contra los medios de comunicación impresos prokurdos, esas sanciones fueron condenadas con frecuencia por el TEDH por considerarlas desproporcionadas. Aunque la derogación de ese artículo fue un avance real, su efecto ha sido menos eficaz en estos últimos años a causa de las frecuentes “prohibiciones de publicación” (6) y cierre administrativo de sitios web, lo que constituye una forma de censura incluso más drástica.
- Moderación de los artículos 285 y 288 del Código Penal, que limitaba la cobertura de los juicios por parte de los medios de comunicación. Estos artículos, que penalizaban la “violación de la confidencialidad de una investigación” y el “intento de influir en el curso de un juicio” (7), se utilizaron con frecuencia para desalentar la información sobre los principales procesos políticos. La versión enmendada declara que “ya no es un delito informar sobre investigaciones y procesos dentro de los límites de la información al público”. También se restringe la aplicación del artículo 288 y se castiga a sus infractores con una multa en vez de con una pena de cárcel de cuatro años.
- Restricción de la utilización de la prisión preventiva y supresión de otras prácticas abusivas en las investigaciones sobre terrorismo y crimen organizado. Para poner fin al uso sistemático de la prisión preventiva, se exigió que se obtuviera una prueba concreta durante el juicio para justificar su uso. Además, los jueces que investigan actos de terrorismo o de crimen organizado ya no pueden restringir el acceso de los abogados de la defensa al expediente o impedirles que examinen la documentación –una práctica que dificultaba a los abogados la defensa de sus clientes-. En realidad, el impacto de esta reforma fue limitado hasta 2014 debido a la resistencia de amplios sectores del sistema judicial (8).

4. Se puede consultar aquí el texto de la ley

5. Comunicado de prensa de RSF del 9 de febrero de 2012: “Proyecto de ley sobre la reforma judicial, ¿un gesto apaciguador o un principio real de cambio?”

6. Véase, por ejemplo, el comunicado de prensa de RSF del 19 de junio de 2014: “Los medios de comunicación turcos olvidan mencionar a los 80 rehenes turcos en Irak”

7. Se puede consultar aquí el texto de la ley

8. Comunicado de prensa de RSF del 11 de marzo de 2013: “Es necesario que unas reformas ambiciosas pongan fin a la persecución judicial de los periodistas”.

“Cuarta propuesta de reforma judicial”

Adoptada por el Parlamento en abril de 2013, la “cuarta propuesta de reforma judicial” entró en el corazón del problema, la Ley Antiterrorista (9). La finalidad declarada de la reforma era la de asegurar que esa ley no penalizara el contenido informativo a no ser que incitara, defendiera o justificara la violencia:

- Los criterios de incitación, defensa y justificación de la violencia están incluidos en los artículos 6.2. y 7 de la Ley Antiterrorista, que penaliza respectivamente “la reproducción de panfletos o declaraciones” de una organización terrorista o la “propaganda” terrorista. Estos criterios también están incluidos en el artículo 220.8 del Código Penal, que penaliza la “propaganda de una organización criminal”.
- La aplicación del artículo 215 del Código Penal, que penaliza el “elogio de un delito o de un malhechor”, está condicionada por la existencia de una “clara e inminente amenaza contra el orden público”. A causa de ese artículo se penalizaron expresiones como “el señor Öcalan” o “el líder del PKK” por considerarse demasiado respetuosas.
- Durante el juicio, los acusados tienen el derecho a ser defendidos en la lengua que elijan (artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Criminal), pero el Estado no asume los costes de la traducción. Asimismo, el tribunal puede denegar ese derecho si considera que “puede prolongar inútilmente el juicio”. En cualquier caso, supone una mejora respecto a la situación previa en la que se encontraban los periodistas kurdos cuando testificaban como acusados en el juicio contra el KCK.
- Otras enmiendas, como las relativas a los artículos 220.6 (“delitos cometidos en nombre de una organización criminal”) y 318.1 (“incitación a la desertión del servicio militar”), no redujeron de forma significativa el impacto opresivo de estos artículos.

RSF y otras organizaciones de derechos humanos han reclamado durante mucho tiempo que se distinga entre la expresión de una opinión y la defensa de la violencia, pero la “cuarta propuesta de reforma judicial” no lleva esa distinción a sus lógicas conclusiones. La definición de “terrorismo” sigue siendo extremadamente amplia y vaga, por lo que muchos jueces siguen aplicándola a numerosas actividades pacíficas.

Decenas de periodistas siguen acusados de “pertenencia a organización terrorista” de acuerdo con el artículo 314 de la Ley Antiterrorista por una prueba directamente

relacionada con su trabajo como informadores. La redacción y la pertinencia del artículo 314 son tan amplias que, para ser acusados, es suficiente con cubrir actos organizados por el movimiento kurdo o expresar opiniones o hacer un análisis que parezcan cercanos al PKK. Ni siquiera es necesario que existan factores de violencia. Según un exministro de Justicia (10), hubo 20.000 condenas relacionadas con ese artículo de 2009 a 2012. Esta cifra da una idea de su draconiana envergadura. El proceso a 44 periodistas y trabajadores de medios de comunicación por su presunta actividad como “servicio de prensa del KCK” es también reflejo de su alcance.

9. Comunicado de prensa de RSF del 13 de febrero de 2013: “Las anunciadas reformas sobre legislación antiterrorista no pueden quedarse a medio camino”

10. Sadullah Ergin, citado en el informe de HRW de 2014: “La reducción de los derechos humanos en Turquía”

Reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal

En marzo de 2014 se adoptó una reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal (Ley nº 6526):

- Reducción de la duración máxima de la detención preventiva de diez a cinco años.
- Abolición de los Tribunales Penales Superiores y de los Tribunales Penales Regionales para delitos graves, que eran un vestigio de las disposiciones judiciales especiales introducidas bajo el estado de emergencia. Esos tribunales estaban encargados de los principales casos políticos como el del KCK y el del Ergenekon para los que se utilizaron procedimientos especiales.

Esta reforma eminentemente política se produjo unos meses después de las alegaciones improcedentes de corrupción que minaron la autoridad del Gobierno en diciembre de 2013. Enfurecido al descubrir que había sido investigado por el sistema judicial, el Gobierno se embarcó en una gran purga del aparato judicial y policial para tenerlos bajo control. Para cambiar este telón de fondo, el Gobierno abolió los tribunales especiales, que eran considerados hostiles, transfiriendo parte de sus poderes a los tribunales penales ordinarios.

El efecto inmediato de esa reforma fue la transferencia de la investigación de los principales casos políticos a los tribunales ordinarios, que aplicaron las recientes “propuestas de reforma judicial”, concediendo la libertad provisional a muchos sospechosos. En 2014, se concedió la libertad condicional a un total de 37 periodistas, incluyendo a los que estaban presuntamente acusados de actuar como “servicio de prensa del KCK”. No obstante, no se les retiró la acusación y se prosiguió el juicio. Si eran condenados, volvían a la cárcel.

Una justicia al servicio del Estado

Durante mucho tiempo, RSF ha venido señalando que la cultura judicial de Turquía es, como mínimo, tan opresiva como sus leyes (11). “El sistema judicial actúa como si su función fuera la de proteger al Estado”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, Tahir Elçi, en 2013. Acostumbrados por décadas de custodia militar del destino del país, amplios sectores del sistema judicial siguen imbuidos de una mentalidad de la seguridad por lo que reaccionan de una forma paranoica contra los sospechosos, a los que se considera como presuntos culpables. Su enfoque es el mismo que el de la Ley Antiterrorista, basada más en la defensa de un Estado abstracto que en la condena de delitos específicos. Hasta que no se erradique esa cultura judicial, toda la imprecisión legislativa seguirá siendo un arma poderosa en manos de jueces capaces de interpretaciones excesivas de la ley, o en manos de funcionarios gubernamentales con objetivos políticos varios. Un ejemplo elocuente de esto fue la acusación de propaganda terrorista contra 18 reporteros y redactores por publicar la fotografía del DHPK-C, un pequeño grupo de extrema izquierda, durante su sangrienta toma de rehenes en los tribunales de justicia de Estambul en marzo de 2013.

Por desgracia, la única consecuencia de la purga del aparato judicial llevada a cabo en años recientes ha sido el reemplazo de los funcionarios del antiguo sistema por los del Gobierno del AKP, como demostró la caza de brujas orquestada en diciembre de 2013 contra los simpatizantes del movimiento Gülen. Las autoridades apartaron a cientos de jueces, fiscales y agentes de policía y fortalecieron el Consejo Superior de la Magistratura (HYSK). Los que no fueron apartados adoptaron el comportamiento que se esperaba de ellos, para no llamar la atención, logrando que la independencia judicial se convirtiera más que nunca en una palabra vacía. “Nosotros [los abogados] pensamos que no influimos en el sistema judicial, que solo está influido por factores externos al tribunal”, declaró Tahir Elçi. “Nos sentimos profundamente impotentes e ineficaces”.

La relajación del tabú respecto a la información sobre la cuestión kurda en los medios de comunicación entre 2013 y 2015 fue, por tanto, fruto de la obediencia del sistema judicial a las órdenes impartidas por el Gobierno. El Gobierno impuso la tolerancia en este tema específico para no torpedear el proceso de paz. De aquí la extrema fragilidad de ese “progreso”. En abril de 2015, Ozcan Kiliç afirmó: “La moderación actual es puramente política y totalmente reversible. Si cambia el contexto político, volverán los procesamientos”. En su opinión, la libertad condicional concedida a los periodistas implicados en los casos del KCK y de Ergenekon no tenía nada que ver con la ley, sino que era debida más bien a la “voluntad política de poner fin a esos casos”.

La creciente actitud autocrática de Erdogan y la disminución de la crítica en los últimos años han demostrado la ausencia de una global y duradera voluntad de ampliar los límites del debate público. La tolerancia provisional hacia la cuestión kurda fue la excepción en un contexto dominado por una creciente censura, incluida la progresiva cibercensura (como demostró el bloqueo repetido de Twitter y YouTube **(12)**, el recrudecimiento de la violencia de la policía contra los periodistas que cubrían las manifestaciones (como la celebrada en el parque Gezi **(13)**, la concentración empresarial de los principales medios de comunicación en unas pocas manos, la escalada de la autocensura estimulada por la destitución de periodistas críticos **(14)**, la oleada de procesamientos con la acusación de haber insultado a Erdogan, el acoso a los medios de comunicación que apoyaban al movimiento Gülen **(15)** y, más recientemente, el acoso a Cumhuriyet **(16)** y Hürriyet.

Aunque las “propuestas de reforma judicial” alentaron la esperanza de obtener más libertad de expresión, otras reformas tomaron la dirección opuesta. Estas últimas incluían un aumento desordenado de los poderes policiales y de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT) **(17)** y la mayor posibilidad de censura online. Durante un cierto tiempo, la censura solo cambió sus objetivos, relajándose respecto a los medios de comunicación prokurdos y concentrándose en nuevos adversarios.

11. “Un libro no es una bomba”, *op. cit.*

12. Comunicado de prensa de RSF del 27 de marzo de 2014: “El bloqueo de YouTube aumenta en vísperas de las elecciones”

13. Comunicado de prensa de RSF del 17 de junio de 2013. “Recrudecimiento de la violencia policial contra los periodistas que cubren la protesta del “Occupy Gezi”

14. Véase WeFight Censorship de agosto de 2013: “Oleada de destituciones tras las protestas del parque Gezi”

15. Comunicado de prensa de RSF del 19 de diciembre de 2014: “El caso Gülen: liberado redactor jefe, encarcelado ejecutivo de medios de comunicación”

16. Comunicado de prensa de RSF del 1 de junio de 2015: “RSF apoya al diario atacado por el presidente Erdogan”

17. Comunicado de prensa del 17 de febrero de 2015: “La propuesta de reforma dará a la policía aún más libertad para hostigar a los periodistas”



3. LA REANUDACIÓN DEL ENFRENTAMIENTO RECRUDECE LA CENSURA

La censura sobre la cuestión kurda reapareció nada más abandonarse el proceso de paz (18). A finales de julio de 2015, poco después de que Turquía iniciara sus ataques aéreos contra las bases del PKK en Irak, el Consejo Superior de Telecomunicaciones (TIB) ordenó el bloqueo de casi 100 sitios web de noticias, de los cuales por lo menos 65 eran kurdos. Entre ellos estaban los sitios de las principales agencias de noticias prokurdas como Özgür Gündem, DIHA, ANHA y RojNews y los sitios de los periódicos locales como Yüksekova Haber y Cizre Haber. DIHA intentó resistir instalando una serie de sitios espejo durante los dos meses posteriores pero fueron bloqueados, uno detrás de otro. 31 trabajadores de medios de comunicación fueron arrestados por poco tiempo durante las graves redadas en las sedes centrales de DIHA y Azadiya Welat en Diyarbakir el 28 de septiembre.

Las repercusiones del conflicto no se limitaron a los medios de comunicación kurdos. Todos los medios de comunicación turcos fueron golpeados por la reanudación del estado de guerra y por la voluntad del Gobierno del cierre de filas de la nación alrededor de su liderazgo.

18. Comunicado de prensa de RSF del 18 de julio de 2015: “Los medios de comunicación son víctimas colaterales del aumento de la tensión”

Se reanuda la autocensura

El 25 de julio, el primer ministro Ahmet Davutoglu y el viceprimer ministro Yalçın Akdoğan invitaron a los directores de los principales medios de comunicación a un encuentro informativo sobre las “operaciones antiterroristas”. Parece que las directrices emitidas fueron respetadas porque muchos de los principales medios de comunicación volvieron a informar como antes. El principal canal de televisión empezó por ignorar a los representantes del partido HDP a pesar de la naturaleza pacifista de sus declaraciones. Este giro de 180º respecto al HDP fue el más sorprendente porque los medios de comunicación habían prestado mucha atención al líder del partido, Selahattin Demirtas, en los meses precedentes. Como el debate político sobre la cuestión kurda, también se abandonó la información sobre la situación de los civiles en las zonas afectadas por los combates a favor de la casi exclusiva cobertura de temas relacionados con la seguridad, centrándose en los funerales de soldados y agentes de la policía asesinados por el PKK. En la actualidad, muchos medios de comunicación esperan que llegue la versión del Alto Mando militar antes de informar sobre los ataques a las fuerzas armadas turcas. Durante mucho tiempo, no se informó sobre el ataque más sangriento del PKK en años —el 6 de septiembre en Daglica (una aldea

cerca de la frontera con Irak)- hasta que el Ejército lo confirmó y emitió un comunicado oficial con el número total de víctimas.

La suerte de los civiles que permanecieron atrapados cuando el Ejército sitió Cizre (una ciudad en la provincia de Sirnak) del 4 al 12 de septiembre tuvo una cobertura mínima en los principales medios de comunicación. Hubo muy pocos reportajes sobre las víctimas civiles, el impacto humanitario de la escasez de alimentos, o el daño producido a las infraestructuras. Cuando los parlamentarios del HDP organizaron una marcha a Cizre para llamar la atención sobre esa situación, su iniciativa fue tachada de operación ilegal diseñada para apoyar al PKK.

Sin embargo, la censura recientemente revivida podría entrar en conflicto con las tendencias sociales turcas y regionales que han puesto a los kurdos en el centro del tablero de ajedrez. El proceso de paz ha dejado su impronta en la sociedad y ha impulsado el rechazo de los tabúes. La destacada visibilidad del HDP en el escenario nacional y el “viaje de Diyarbakir” emprendido por varios destacados intelectuales en los últimos años también han contribuido a esta nueva tendencia. Después de haber permitido que la cuestión kurda dividiera y polarizara a los medios de comunicación, no será fácil esconderla nuevamente debajo de la alfombra.

La guerra contra el PKK utilizada como fundamento para una nueva ofensiva contra los medios de comunicación críticos

Durante años, los medios de comunicación críticos han sido objeto de ataques verbales por parte del Gobierno turco. Fueron acusados de traición, terrorismo o desestabilización durante las protestas del parque Gezi de 2013, y, nuevamente, durante la campaña electoral en la primavera de 2015. Pero esos ataques fueron especialmente graves durante la guerra contra el PKK. Ahora los principales medios de comunicación han sido acusados de conspirar con aquellos que han derramado la sangre vertida de los soldados y agentes de policía turcos y, por eso mismo, están señalados como enemigos de la nación.

Özgür Gündem y el diario de izquierdas Evrensel, por ejemplo, fueron descritos como “máquinas criminales” por el viceprimer ministro Bülent Arinç por el reportaje publicado tras el atentado con bombas de Suruç. Y lo mismo pasó con el Dogan Media Group, al que pertenecen medios de comunicación tales como el diario Hürriyet, el canal televisivo de noticias CNN Türk y la agencia de prensa DHA. Criticado por el presidente Erdogan en repetidas ocasiones, el grupo ha sido objeto de una investigación por “propaganda terrorista” desde el 15 de septiembre (19). El fiscal ha acusado a varios medios de comunicación de Dogan de difuminar el rostro de un militante del PKK asesinado por las fuerzas gubernamentales pero no el de los

soldados muertos en un ataque del PKK. También se está investigando otras varias imputaciones que ya han sido rechazadas por un tribunal.

Esta persecución es muy alarmante porque ya se han producido demostraciones de sus efectos nocivos. Enfurecidos manifestantes han atacado dos veces, el 6 y el 8 de septiembre, la sede central de Hürriyet. El Gobierno condenó oficialmente tales comportamientos solo después del segundo ataque e incluso entonces el mensaje fue poco claro. En vez de ser cuestionado o arrestado, el parlamentario del partido en el poder AKP que fue uno de los instigadores del primer ataque fue promovido en el escalafón de su partido una semana más tarde.

Criticar la forma con la que el Gobierno sigue manejando la cuestión kurda es, una vez más, peligroso incluso para los periodistas más consagrados. El reputado columnista Hasan Cemal afronta una condena de cuatro años y medio de cárcel por insultar al presidente en una columna publicada en agosto y titulada “La responsabilidad por el derramamiento de sangre reside sobre todo en el sultán en su palacio”. Cemal ha señalado que era la primera vez que era procesado desde el golpe militar de 1971 (20). Otro columnista, Kadri Gürsel, fue despedido a finales de julio por Milliyet, el diario en el que había estado trabajando en los últimos 17 años, por un tweet en el que culpaba a Erdogan del atentado con bombas en Suruç. Milliyet despidió también al columnista Mehves Evin y a otros cinco periodistas a finales de agosto (21).

Lo que es alarmante es ver cómo los medios de comunicación progubernamentales ayudan a criminalizar a los periodistas críticos. La investigación judicial del Dogan Media Group tuvo su origen en un artículo publicado en el diario progubernamental Gunes. El diario progubernamental Yeni Safak tildó a Mehves Evin de “simpatizante del PKK”. Cem Küçük, un columnista del periódico progubernamental Star, se ha destacado por sus numerosos ataques verbales recientes contra los periodistas críticos. El 9 de septiembre, el día después del segundo ataque de los manifestantes a la sede central de Hürriyet, acusó al periodista de Hürriyet Ahmet Hakan de ser el “principal propagandista del PKK” y añadió: “Si quisiéramos, te aplastaríamos como a una mosca. Tienes suerte de estar aún vivo y de que, hasta ahora, hayamos tenido piedad de ti”. El 30 de septiembre, Ahmet Hakan fue víctima de un ataque físico cuando salía de su casa de Estambul.

19. Comunicado de prensa de RSF del 15 de septiembre de 2015: “El aumento peligroso de la censura puede agravar la crisis”

20. “Periodistas investigados por probables “insultos” al presidente turco”, Hürriyet Daily News, 17 de septiembre de 2015

21. Milliyet despide a siete periodistas que son críticos con el Gobierno”, Today’s Zaman, 28 de agosto de 2015



3 SER PERIODISTA EN DIYARKABIR: INFORMAR DESDE UN TERRENO INESTABLE

1. MEDIOS VULNERABLES Y POLARIZADOS

El panorama mediático del sudeste de Anatolia es dinámico y diversificado. Pero, la información sigue siendo un material altamente inflamable. Como sucede en el plano nacional, una buena parte de la prensa local está vinculada a partidos políticos o a otros grupos de interés, de tal forma que los periodistas son rara vez percibidos como tales, sino más bien como “agentes” al servicio de “amos” a los hay que desenmascarar constantemente, cuando no como “enemigos” que pueden, llegado el momento, ser considerados como objetivos. La fuerte polarización de los medios turcos ya estaba exacerbada en la región, antes de la reanudación de los combates. “Se trata siempre del legado del estado de excepción: trabajamos en un terreno altamente conflictivo”, aseguraba el presidente de la Asociación de Periodistas del Sudeste (GGC), Veysi Ipek, en abril de 2015.

Tensiones políticas y “presión de la calle”

La autocensura pesa mucho. “Es un control recíproco: un periodista escribe sobre su compañero y viceversa”, explicaba Veysi Ipek. Incluso en tiempos de paz, la confrontación ha sido intensa entre los medios, impulsada por la aparición de nuevos actores políticos, como los islamistas radicales. Y los ataques verbales son tanto más preocupantes, cuanto que las principales fuerzas políticas locales se apoyan en brazos armados clandestinos. “Todas las partes de la sociedad quieren sentir que se les apoya. La independencia es muy difícil de preservar”, lamenta Mesut Figanççek, redactor jefe del periódico local Yenigün, que señala “la falta de cultura democrática de la sociedad”.

La extrema polarización de la sociedad local y la violencia de la historia reciente favorecen una cultura del secreto y de la connivencia. “En principio, un periodista no debe ser alguien cercano a sus fuentes de información” -explica un profesional de los medios- “pero aquí ningún intercambio de información es posible sin una gran cercanía. En estas condiciones, la fuente busca a menudo imponer sus condiciones a

los periodistas, para hacerles decir exactamente lo que quiere”. La mayoría de los periodistas contactados por RSF denuncian un “sistema de acreditación oculto” basado en la afinidad política, que restringe el acceso a la información. Las manifestaciones en las calles son lógicamente difíciles de cubrir para los medios que no son simpatizantes. Pero, según varios periodistas, incluso la cobertura de las celebraciones del Nuevo Año kurdo es objeto de restricciones partidistas, por ambas partes.

“Como corresponsal de un organismo de prensa internacional, aún puedo cubrir las ruedas de prensa del HDP o del Colegio de Abogados” –explica un periodista-, “pero es algo totalmente imposible para nuestros colegas de Rûdaw (1), por ejemplo”. Los periodistas de este grupo también son rechazados en los campos de refugiados sirios de Suruç, tal y como les sucede a sus compañeros de Al-Jazeera. Paralelamente, varios periodistas próximos al movimiento kurdo denuncian el ostracismo al que son sometidos por las autoridades centrales: “nunca nos invitan a las ruedas de prensa organizadas por los poderes públicos, la policía, etc”, asegura uno de ellos. El mismo bloqueo se da por parte de algunos ayuntamientos conservadores.

La autocensura, entendida en sentido estricto o con los eufemismos de “equilibrio” o de “autocontrol” es omnipresente. “Cuando eres periodista en una sociedad tan politizada, sabes que lo que escribes capta la atención. No puedes hacerlo pasando desapercibido”, explica un periodista. “Estamos obligados a tener en cuenta la sensibilidad de la población local”, añade otro. “No hay necesidad de amenazas concretas, de llamadas telefónicas u otras vías”, explica un compañero, “la presión de la calle es suficiente. Cada uno sabe lo que debe hacer, ningún periodista se arriesga a sufrir una muerte social a sabiendas de lo que supone.”

El fundador de un diario local se defiende aduciendo un cierto equilibrio: “Nuestra cabecera es la de un periódico plural, que trata con personas de cualquier perfil y afinidad, y que publica los comunicados de todo el mundo”, afirma, resaltando que la capacidad de un periodista de mantener su independencia depende, en gran medida, de su personalidad y de su prestigio. Con el afán de negar cualquier autocensura, uno de sus colegas sugiere involuntariamente lo contrario: “no te puedes autocensurar, porque la gente ve todo con su propia mirada [...] Aquí, a la menor equivocación, las personas afectadas vienen a buscarte”. Preguntado sobre cuál debería ser el principal cambio que propicie una mayor libertad de prensa, Mûcahit Ceylan, vicepresidente de la GGC, respondía en abril de 2015: “Que la política se retire de los medios. Entonces, el periodismo será libre”.

1. Rûdaw es un grupo de prensa cercano al KDP, un partido político rival del PKK, que está en el poder en el Kurdistan iraquí.

Vulnerabilidad de la prensa local

Además de a estos desafíos compartidos por la prensa local y nacional, los periódicos locales se enfrentan a una dificultad añadida: su vulnerabilidad económica, especialmente en lo que concierne a las autoridades locales. Sin anunciantes, de la decena de diarios con los que cuenta Diyarbakir, muy pocos sobrevivirían. Y en el mercado publicitario, los anuncios de las Administraciones Públicas son claramente mayoritarios. “Hace un tiempo, un diputado que nos había demandado manifestó su sorpresa ante el hecho de que le hubiésemos criticado, cuando dependíamos de la publicidad institucional”, explica el redactor jefe de un diario local. “Incluso mis socios comenzaron a preocuparse por mis artículos críticos. Algunas grandes empresas se niegan a insertar anuncios en nuestro medio”. La mayoría de los periodistas consultados por RSF coinciden en que esta dependencia es un factor de gran calado en la autocensura.

Otro problema señalado con frecuencia es la arbitrariedad de determinados cargos electos y funcionarios locales, que consideran su circunscripción como un feudo y logran asfixiar a los periodistas críticos con avalanchas de procedimientos judiciales. Nevzat Bingöl guarda un recuerdo amargo de su intento de crear un semanario local en Karliova, en la región de Bingöl. Pese a haber documentado fehacientemente irregularidades en ciertos concursos y adjudicaciones de la subprefectura y pese a haber instado al entonces subprefecto a respetar su derecho a una respuesta, éste consiguió forzar una condena por difamación para Bingöl por las vías civil y penal, lo que le obligó a cerrar su publicación para poder hacer frente a las multas. Las demandas interpuestas contra el subprefecto fueron, sin embargo, archivadas.

Violencia generalizada

Bien en forma de abusos policiales o de manifestaciones de las fuertes tensiones que afectan a la sociedad, los actos de violencia contra profesionales de los medios no son un fenómeno aislado en la región, haya o no proceso de paz. El 12 de agosto de 2015, dos periodistas (1) fueron retenidos por las fuerzas de orden público, mientras intentaban cubrir la llegada al hospital de Nusaybin –en la región de Mardin- de un policía herido por disparos del PKK. Miembros de las fuerzas antidisturbios dispararon al aire cuando se acercaban, exclamando que eran todos militantes para, a continuación, agredirlos a golpes, rompiendo la máquina fotográfica de uno de ellos. El 9 de junio, tres periodistas resultaron heridos por militantes del partido islamista Hûda-Par, en Diyarbakir, en el marco de una expedición de castigo en los barrios controlados por el PKK, tras la muerte a tiros de un líder islamista. El reportero de la agencia IHA, Burak Emek y su colega de la agencia DHA, Serdar Sunar, fueron atacados

con un sable, mientras que otra corresponsal de DHA, Canan Altintas, resultó herida de gravedad en la cabeza por una pedrada. Los tres tuvieron que ser hospitalizados.

Otros tres periodistas (2) fueron agredidos por las fuerzas del orden y retenidos brevemente, cuando cubrían actos de violencia policial, el 27 de febrero en Urfa, en la región de Suruç. El 2 de octubre de 2014, militantes hostiles hirieron con arma blanca a cuatro periodistas prokurdos (3) en Diyarbakir, mientras cubrían una manifestación en solidaridad con Kobane. El 17 de septiembre de 2014, un equipo de la Agencia Anatolia (4) fue atacado por manifestantes, cuando grababa el cierre de un colegio por la policía. El 22 de agosto de 2014, la imprenta del periódico local Varto Haber fue incendiada por un grupo presuntamente vinculado con el PKK en Varto, en la región de Mus.

Como síntoma de que la situación comenzaba a tensionarse, un periodista fue secuestrado por el PKK en agosto de 2014, una novedad después de largos años sin este tipo de incidentes. Ali Adiyaman, reportero de la agencia de prensa regional ILKHA, fue retenido por cuatro militantes armados, el 27 de agosto, en el transcurso de un control de identidad en Dagcilar, en la región de Silvan. Según el relato de su hermano, sus captores le habrían reprochado “escribir demasiados artículos en su contra”. Fue liberado cuatro días más tarde, en la región de Hazro.

Bastante antes de la reanudación de los combates en Turquía, la cercanía del conflicto sirio ya contribuyó a elevar más las tensiones. Los combates que asolaban el Kurdistán sirio, justo al otro lado de la frontera, impactaron fuertemente en la población del sudeste de Anatolia. Todos los actores del conflicto tienen su réplica en Turquía, empezando evidentemente por el PKK, pero también por los partidarios del Estado Islámico, del régimen de Bachar Al-Assad y otras facciones diversas. Por otra parte, los nacionalistas turcos acusan a todas estas fuerzas políticas de querer sembrar el caos en el país.

1. Ahmet Akku, de la agencia DHA y Arif Altunkaynak, de la Agencia Anatolia
2. El reportero de la agencia DIHA, Ibrahim Polat, y los corresponsales del diario Azadiya Welat, Bisar Durgut y Mustafa Tasdemir.
3. Bisar Durgut y Nihat Kutlu, corresponsales del diario Azadiya Welat, así como Beritan Canözer y Sarya Gözüoğlu, de la agencia de prensa femenina JINHA. El primero fue hospitalizado, tras recibir ocho cuchilladas.
4. El reportero Hüseyin Bragis recibió tres cuchilladas en la pierna, el cámara Aziz Aslan fue golpeado y su cámara sufrió daños.



LA DIFÍCIL COBERTURA DE LAS REVUELTAS DE OCTUBRE DE 2014

Durante la semana del 6 de octubre de 2014, el asedio por parte del Estado Islámico de Kobane, la tercera ciudad kurda de Siria, desencadenó la ola de revueltas más violenta que ha vivido Turquía, en los últimos 30 años. Los enfrentamientos entre militantes prokurdos, islamistas y nacionalistas turcos causaron, al menos, 36 muertos en todo el país y llevaron a la instauración del estado de excepción en seis provincias del sudeste. Los periodistas, que trabajaban en condiciones difíciles para dar cuenta de los acontecimientos, también fueron víctimas. La asociación ÖGC y GGC condenaron las heridas recibidas por varios de sus miembros y calificaron el momento como un pico de tensión inédito, desde hacía años.

Herido mientras grababa enfrentamientos entre militantes del PKK y de Hûda-Par, un cámara de la cadena Gele Kürdistan, mostró involuntariamente su rostro en pantalla. Este hecho permitió a militantes de Hûda-Par identificarle y amenazarle en los días posteriores, acusándole de haberlos desacreditado y de haber organizado los enfrentamientos. Un repartidor de periódicos prokurdos, Kadri Bagdu, fue abatido el 14 de octubre, mientras realizaba su ronda diaria de reparto en Seyhan, en la región de Adana (1).

Violencia policial en la frontera

Mientras que algunos periodistas fueron agredidos en enfrentamientos hasta Ankara o Estambul (2), ciertas zonas fronterizas de Siria han sido el escenario de violencia policial generalizada. En concreto, en el distrito de Suruç, las fuerzas del orden dispersaron sin miramientos a numerosos periodistas que cubrían la situación en Kobane, del otro lado de la frontera. El 5 de octubre, en las inmediaciones del puesto fronterizo de

Mürsitpınar, gendarmes lanzaron gases lacrimógenos a un minibús de la BBC, que se incendió parcialmente. Los periodistas Paul Adams y Piers Scholfield apenas tuvieron tiempo de huir y resguardarse. “Estaba a unos diez metros del vehículo de la BBC”, afirma Veysi Ipek, “mientras fotografiaba la escena, nuestro coche también fue alcanzado por proyectiles y un bote de gas lacrimógeno me causó heridas en el brazo”. “Yo también fui atacado en Suruç”, explica Ertus Bozkurt. “A mi compañero Turabi Kisin le provocaron heridas por gas lacrimógeno en una pierna, otros dos periodistas fueron agredidos y cuatro unidades móviles sufrieron daños”.

A su regreso de la frontera entre Siria y Turquía, una delegación de la plataforma “Libertad para los Periodistas” (GÖP), denunció estos actos violentos por parte de la policía y recopiló numerosos testimonios (3). La corresponsal de Özgür Gündem, Esra Çiftçi, explicó a la delegación que había sido brutalmente apaleada por la policía, mientras cubría el traslado al hospital de tres heridos. Un reportero de la cadena TV10 describió cómo la policía había lanzado un bote de gas lacrimógeno al parabrisas de su coche. Añadió que la antena satélite del automóvil había sido objetivo premeditado de un vehículo de los antidisturbios. Resaltando que también ciertos profesionales de medios progubernamentales habían sido agredidos por la población, un periodista de agencia se quejó del trato discriminatorio de las fuerzas del orden respecto de la prensa: “Dejan pasar a personas que ni siquiera son periodistas y nos achacan, a la vez, todos los problemas”.

Acceso restringido y detenciones

En determinadas áreas fronterizas, declaradas “zonas militares” durante los enfrentamientos, se prohibió el acceso a

periodistas que no contaban con la acreditación de prensa oficial, expedida por los servicios del Primer Ministro. Estas restricciones se produjeron especialmente en la colina situada frente a Kobane, punto de observación privilegiado para los periodistas que deseaban cubrir los enfrentamientos. Numerosos reporteros, muchos de ellos corresponsales de medios prokurdos, como la agencia DIHA, se vieron privados, así, de acceder a este lugar tan importante para la cobertura de los acontecimientos, por no estar en posesión de la preciada autorización. Las mismas restricciones se aplicaron en las regiones donde se impuso el toque de queda: solo los periodistas poseedores de carné de prensa fueron autorizados a circular libremente, encarando las mismas dificultades que el resto de los ciudadanos, expuestos a la violencia y a los numerosos puestos de control del Ejército. Mientras que, en ese período, la frontera era permeable para combatientes y contrabandistas, los profesionales de estos medios se enfrentaban a obstáculos mayúsculos para atravesarla. Veinte colaboradores de medios de los alrededores de Kobane fueron retenidos en su entrada a territorio turco, el 6 de octubre, cuando huían de los combates. Durante cerca de dos semanas, fueron concentrados en un gimnasio de Suruç con 200 refugiados, en condiciones muy duras, antes de ser puestos en libertad.

Del mismo modo, también resultó difícil para los periodistas turcos pasar la frontera para alcanzar Kobane, incluso cuando el Estado Islámico (EI) levantó el sitio a la ciudad. “Algunos compañeros, rechazados en el “checkpoint”, se vieron obligados a franquear la frontera en otros sitios, con el consiguiente riesgo de caer en un campo

de minas o toparse con una patrulla del EI”, explicaba Veysi Ipek, en abril de 2015. Al día siguiente de que los últimos elementos del Estado Islámico abandonasen Kobane, el gobernador de Sanliurfa facilitó la entrada de periodistas y la frontera, de nuevo, se cerró. Recibo muchas llamadas de habitantes de Kobane, que me piden que vaya para dar cuenta de su situación, pero la prefectura de Sanliurfa se opone a nuestra entrada. Tenemos dificultades para cubrir la situación concreta sobre el terreno”, añadía Ipek.

Según este periodista, el YPG contribuyó a la situación de bloqueo, entregando al Ejército turco a los periodistas sorprendidos en el lado sirio. Éstos afrontaron sanciones de 3.000 liras turcas, que equivalen aproximadamente a 1.000 euros. En el caso de los corresponsales extranjeros, pasar ilegalmente la frontera se traducía en una detención seguida, en general, de una expulsión. Es el caso de un periodista francés y de tres compañeros italianos, arrestados en Mürsitpınar el 18 de junio de 2015 y expulsados, dos días más tarde.

1. [Comunicado de Reporteros Sin Fronteras: “Asesinado un repartidor de prensa en Seyhan”, 14 de octubre de 2014](#)
2. [Comunicado de Reporteros Sin Fronteras: “La libertad de información, necesaria para restablecer la calma”, 10 de octubre de 2014](#)
3. [BIA Haber Merkezi, “GÖPTen Kobanê Raporu: Medya Taciz ve Tehdit Altında”, 8 de octubre de 2014](#)

3. ¿UNA GUERRA SIN TESTIGOS?

Zonas prohibidas

Más de 70 “zonas de seguridad”, caracterizadas por el toque de queda y el control de los desplazamientos, han sido desplegadas desde el fin del alto el fuego. Al menos 11 provincias del este y del sudeste de Anatolia se han visto afectadas: Sirnak, Siirt, Agri, Elazig, Tunceli, Kars, Batman, Hakkari, Van, Mardin y Diyarbakir. La extensión de las zonas afectadas representa un nuevo obstáculo para la libre circulación de los profesionales de los medios, especialmente para los que no disponen de carné de prensa.

Detenciones y expulsiones: intimidación a los periodistas extranjeros

El mensaje está claro: los periodistas extranjeros que quieren cubrir los enfrentamientos en el sudeste no son bienvenidos. Las medidas tomadas contra ellos a lo largo de las últimas semanas no tienen precedente, desde los años 90. **(1)**

El 31 de agosto, se ordenó prisión provisional para dos periodistas británicos de VICE News y su ayudante iraquí, tras su retención e incomunicación. Los tres fueron inicialmente acusados de grabar sin acreditación y posteriormente se les imputó el delito de “crímenes cometidos en nombre de una organización terrorista”. Jake Hanrahan y Philip Pendlebury fueron puestos en libertad tres días más tarde y expulsados de Turquía, pero su ayudante y compañero Mohammed Ismael Rasool sigue preso en una cárcel de alta seguridad en Adana (sur del país).

Habla por sí solo, también, el caso de la periodista holandesa Frederike Geerdink. Instalada en Turquía desde 2006, era la única periodista extranjera residente en Diyarbakir. La presión contra ella se ha recrudecido, a lo largo de 2015: fue detenida por un breve período de tiempo en enero, acusada de “propaganda del PKK”, fue absuelta en abril, pero la Justicia recurrió la sentencia y el proceso se reanudó. De nuevo detenida el 6 de septiembre **(2)** en el distrito de Yüksekova (provincia de Hakkari, cerca de la frontera iraquí), junto a militantes pacifistas cuyas actividades estaba cubriendo, fue finalmente expulsada, cuatro días después. Tras largos años en Turquía, vive actualmente en Holanda como un exilio.

1. Comunicado de prensa de Reporteros Sin Fronteras: “Turquía encarcela a dos periodistas extranjeros por primera vez en 15 años”. 1 de septiembre de 2015
2. Comunicado de prensa de Reporteros Sin Fronteras: “Continúa el acoso a los periodistas extranjeros: Frederike Geerdink, otra vez detenida”. 7 de septiembre de 2015

CONCLUSIÓN

Turquía ha entrado en un período de alto riesgo, en el que la deriva autoritaria del poder y el estallido de la violencia se retroalimentan. Es poco probable, además, que la situación se relaje con la repetición de las elecciones legislativas del 1 de noviembre. Frente a los peligros que acechan al país, la presencia de medios libres e independientes se hace más necesaria que nunca: para que Turquía sea consciente de la situación de las poblaciones afectadas por los combates, para que se abra un debate sobre las raíces del conflicto y sus posibles soluciones, y para frenar la espiral de polarización y de odio. Por mucho que a Recep Tayyip Erdogan no le desagrade, Turquía no tiene nada que ganar con unos medios en posición de “firmes”.

RECOMENDACIONES

REPORTEROS SIN FRONTERAS INSTA:

A las autoridades turcas:

- A revisar su actitud respecto a la censura de los medios críticos que cubren la cuestión kurda o el conflicto en curso. En concreto, a ordenar el levantamiento inmediato del bloqueo a las webs de información.
- A levantar las restricciones que coartan las actividades periodísticas en las zonas en las que se llevan a cabo operaciones de seguridad, con el objetivo de permitir a los periodistas locales y extranjeros trabajar sobre el terreno.
- A abolir la ley antiterrorista (nº 3713) o concretar sus términos y a limitar drásticamente sus ámbitos de aplicación, para alinearla con los estándares democráticos.
- A reforzar el estatuto de los principios periodísticos en la legislación, de acuerdo con la jurisprudencia del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH). En concreto, a incluir en la ley el derecho a la información sobre temas de interés público para contrarrestar los imperativos sobre seguridad del Estado, secreto de sumario, etc. A fortalecer considerablemente la protección de las fuentes de información.

- A derogar o reformar en profundidad los artículos del código penal y de la ley sobre Internet, que atentan contra la libertad de expresión.
- A anular todas las prescripciones de los delitos de asesinato a periodistas cometidos durante los años 90, del mismo modo que el resto de los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante ese período.
- A instaurar una cultura administrativa de transparencia, tanto a nivel del Estado como de las provincias, con el objetivo de crear un clima de diálogo y apertura con todos los medios.
- A reformar el funcionamiento del Alto Consejo Audiovisual (RTÜK) para despolitizarlo y devolverle su independencia.
- A dar ejemplo en los discursos públicos y dejar de calificar a periodistas y medios críticos como “terroristas”.

A las instituciones judiciales, a nivel nacional y local:

- A facilitar una transición de la cultura judicial, de la defensa del Estado a la defensa de los ciudadanos.
- A aplicar sistemáticamente la jurisprudencia del CEDH en materia de libertad de expresión y derecho a la información en temas de interés general.
- A abrir investigaciones completas e imparciales sobre los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas en los años 90, en el marco del respeto a los estándares internacionales.
- A poner punto final a los procesos KCK y revisar las imputaciones y condenas por “terrorismo” de profesionales de la información, para garantizar que solo sean perseguidos los actos de violencia claramente probados o concretamente premeditados.

A los periodistas turcos:

- A respetar escrupulosamente las reglas deontológicas en vigor.
- En concreto, a abstenerse de utilizar un lenguaje de odio y a luchar contra la autocensura y la polarización política.

A la sociedad civil y los partidos políticos:

- A contribuir a la pacificación y al diálogo en la sociedad, así como a intentar no envenenar tensiones que tienen repercusiones en la seguridad de los periodistas y colaboradores de los medios.



AGRADECIMIENTOS

Bedri Adanir, Hamza Aktan, Bayram Balci, Osman Baydemir, Raci Bilici, Nevzat Bingöl, Ertus Bozkurt, Ömer Büyüktimur, Hayrettin Celik, Mücahit Ceylan, Tahir Elçi, Rohat Emekçi, Nevin Erdemir, Memedali Ertas, Mesut Figañççek, Ümit Firat, Frederike Geerdink, Cihan Ipek, Veysi Ipek, Özcan Kiliç, Ozan Kiliñ, Ebru Ökmen, Naci Sapan, Emma Sinclair-Webb, Ömer Turtu y muchos otros.

Página | 39

La Sección Española de Reporteros Sin Fronteras agradece la generosa contribución de las traductoras Valentina Valverde y Edith Rodriguez, que han hecho posible la edición en español de este informe.

REPORTEROS SIN FRONTERAS promueve y defiende la libertad de informar y ser informados en todo el mundo. Con sede en París, tiene diez oficinas internacionales (Berlín, Bruselas, Ginebra, Helsinki, Madrid, Estocolmo, Túnez, Viena y Washington) y más de 150 corresponsales en los cinco continentes.

Director general: Christophe Deloire
Representante en Turquía: Erol Önderglu
Responsable para Europa y Asia Central: Johan Bihr
europa@rsf.org

**REPORTEROS
SIN FRONTERAS**
POR LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN